

Chillán, doce de mayo de dos mil veintidós.

Vistos:

1°.- Que, comparece don Gustavo Peñailillo Lechuga, abogado regional de la Sede Ñuble del Instituto Nacional de Derechos Humanos, domiciliado en calle Arturo Prat 430, oficina 22, comuna de Chillán, quien interpone acción de amparo constitucional en favor de Mireya de las Mercedes Pérez Sáez, RUT 17.352.250-9; José Alfredo Lagos Jara, RUT 12.730.406-8; y de la menor de 9 años de edad de iniciales J. A. C. P., hija de los tutelados, todos domiciliados en una parcela situada en Quilmo Bajo, en la comuna de Chillán Viejo, sector Nebuco-Quillay, Ruta 5 Sur, en contra del OS-7 de Carabineros de Chile, representado para estos efectos por la General Sra. María Teresa Araya Jiménez, Jefa de la XVI Zona de Carabineros en la Región de Ñuble, por haber vulnerado el derecho constitucional de la libertad personal y seguridad individual de los afectados, derecho protegido por el artículo 19 numeral 7 de la Constitución Política de la República.

Refiere en cuanto a los hechos que el pasado 21 de abril, aproximadamente a las 06:50 horas, en circunstancias que, según sus propios relatos, Mireya de las Mercedes Pérez Sáez, José Alfredo Lagos Jara, y la menor de iniciales J. A. C. P, se encontraban durmiendo en sus respectivos dormitorios, ingresó violentamente a su domicilio, correspondiente a una parcela situada en el sector rural de Quilmo Bajo, un contingente del OS-7 de Carabineros mediante el descerrajamiento de las puertas de acceso a la vivienda y de los dormitorios interiores, con sus rostros cubiertos y sin parches identificatorios en sus uniformes, ocasionando múltiples daños, procediendo los allanadores a apuntar con armas de fuego a la cabeza de los adultos ordenándoles arrojar al suelo, cuestión que atónitamente observaba la menor, al tiempo que registraban agresivamente todo el inmueble, quienes, luego de inspeccionar minuciosamente la morada, se retiraron del lugar sin encontrar ni incautar ningún objeto ilícito, sin detener a nadie y sin darle a los amparados mayor justificación de lo ocurrido. Lo único que uno de los agentes del OS-7 les manifestó a la pasada al abandonar el sitio fue que debían concurrir a la Fiscalía y a un Juzgado de Garantía a reclamar por lo acontecido, pues “*se habían equivocado*”, cuestión que más tarde hicieron sin que nadie en dichas



instituciones, una vez más, les diera alguna explicación. Agrega que la casa en donde se llevó a cabo el ingreso y registro no es de su propiedad, sino que la arriendan desde aproximadamente dos meses; que ambos trabajan honradamente, él en ascensores y ella como asistente de educación; que su hija cursa educación básica; que ninguno tiene antecedentes penales; y, cuestión importante, que ningún funcionario les exhibió alguna orden de allanamiento, así como tampoco ninguno de ellos les pidió previamente autorización para ingresar a su domicilio, ni les dejaron, al finalizar, copia de algún acta del allanamiento. Añaden, asimismo, que no había entre los allanadores ninguna mujer policía que se hiciera cargo durante el procedimiento de la custodia de la amparada adulta y de la menor, cuestión que las afectó aún más al haberse tenido que exhibir, especialmente la tutelada adulta, casi desnudas ante su ocasional vigilante varón, precisando que la menor se encuentra actualmente con crisis de pánico y que dejó de asistir a clases y que los adultos, se encuentran seriamente afectados psicológicamente, cuestión que ha repercutido en su vida íntima y también laboral.

Sostiene que la ilegalidad del proceder policial de los allanadores resulta manifiesta a la luz de las disposiciones legales y constitucionales que sistematizan la materia, haciendo presente que el Código Procesal Penal, en virtud de lo expuesto en el numeral 5 del artículo 19 de la Constitución Política, reglamenta de manera precisa, especialmente en los artículos 205 y 206, las hipótesis en que las policías se encuentran facultadas para ingresar a un domicilio. Así, en materia de entrada y registro, es importante tener presente que puede llevarse a cabo en lugares cerrados, sólo con el consentimiento de su propietario o encargado, o con autorización judicial pedida por el Fiscal. El Código Procesal Penal, además, contempla la posibilidad de que la policía ingrese sin estas condiciones previas sólo cuando las llamadas de auxilio de personas que se encontraren en el interior u otros signos evidentes indicaren que en el recinto se está cometiendo un delito, lo que en el presente caso no habría acontecido.

Indica que el otorgamiento de una orden judicial de registro, que, según los amparados no existió pues nunca les fue exhibida alguna, no autorizaba a la policía para omitir la solicitud de ingreso al propietario o encargado, sino que solo



la facultaba para que, en caso de negativa, pudiera lícitamente ingresar. Es así que en el presente caso el OS-7 de Carabineros de Chile no sólo ingresó a un domicilio al cual, al parecer, no tenían autorización para hacerlo, sino que además lo hicieron sin solicitar la autorización de ingreso al propietario o encargado del inmueble, quienes, como se dijo, se encontraban en su dormitorio al interior de la casa, procediendo lisa y llanamente a descerrajar violentamente las puertas de acceso al inmueble e ingresara a él. De este modo, es posible advertir que la diligencia realizada por los funcionarios del OS-7 de Carabineros constituyó una ilegalidad pues excedió el marco en que la ley los faculta para actuar, sin que dicha conclusión pueda verse desvirtuada con una especie de excusa que uno de los allanadores les dirigió a los afectados al momento de retirarse del lugar, al indicarles que “*se habían equivocado*”, atendido el carácter profesional que deben tener las policías en su actuar, pudiéndose así demostrar, conforme a todo lo hasta aquí indicado, la existencia de una actuación intrusiva ilegal que afectó, con exceso, la libertad personal y seguridad individual de los amparados pues por largos momentos no pudieron hacer uso de su legítimo ejercicio de desplazarse libremente de un lugar a otro debido a que la policía, al allanar el domicilio, se apartó de la regulación legal y constitucional en la materia, resultando dicho proceder, consecuentemente, arbitrario e ilegal.

Expresa que al verse afectada una menor de edad y en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 inciso 2° de la Constitución Política de la República, resultan aplicable a este caso los estándares internacionales establecidos respecto de la protección de los niños, tanto por los tratados internacionales de derechos humanos como por observaciones generales de los órganos de los tratados y a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La falta de aplicación de dichos estándares debe entenderse como ilegalidad desde la perspectiva de lo dispuesto en el artículo 20 del texto constitucional, procediendo a transcribir la normativa internacional aplicable y jurisprudencia.



Termina solicitando que, acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excm. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Amparo, más las normas constitucionales, de tratados internacionales de derechos humanos y legales ya citadas, solicita se acoja a tramitación la acción de amparo en contra del OS-7 de Carabineros de Chile, representado para estos efectos por la General Sra. María Teresa Araya Jiménez, Jefa de la XVI Zona de Carabineros en la Región de Ñuble, por vulnerar la libertad personal y seguridad individual respecto de los amparados ya individualizados y, previo informes de rigor, se acoja la presente acción constitucional, y se declare la vulneración de los derechos constitucionales consignados en el numeral 7 del artículo 19 de la Constitución Política y, en particular se resuelva lo siguiente:

a) Se declare la ilegalidad y arbitrariedad del allanamiento efectuado por la policía.

b) Se declare la infracción de los derechos constitucionales a la libertad personal y a la seguridad individual de los amparados, consagrados en el artículo 19 N° 7 de la Constitución.

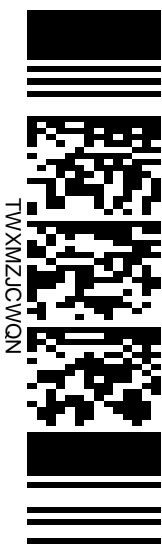
c) Que, producto de la declaración anterior, se adopten en favor de los tutelados todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la defensa de todos los derechos fundamentales violentados.

d) Que se ordene a Carabineros de Chile que instruya los sumarios internos respectivos que permitan dilucidar las responsabilidades administrativas involucradas.

e) Que se ordene a Carabineros de Chile adoptar en lo sucesivo las medidas necesarias para impedir que se repitan, en procedimientos como el que se analiza en este amparo, actuaciones que importen atentados a la libertad personal y a la seguridad individual de los ciudadanos.

f) Que se ordene remitir los antecedentes al Ministerio Público a fin de que investigue la comisión de algún delito.

2°.- Que, informa doña Nayalet Mansilla Donoso, Fiscal Regional de Ñuble quien señala que Mireya De Las Mercedes Pérez Sáez y José Alfredo Lagos Jara,

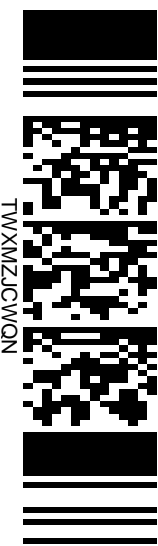


no tienen ninguna investigación penal vigente en calidad de imputados, y que la Fiscalía no ha solicitado ninguna orden de entrada y registro, así como ninguna medida intrusiva respecto de ambos.

Posteriormente, amplía su informe, señalando que ratifica lo ya informado y que en la causa ruc RUC 2100203659-K, señalada en el informe N°50 de Carabineros de Nuble se investiga una red tráfico de drogas en que cerca de 20 personas tienen la calidad de imputados y que en dicho contexto el día 13 abril de 2022 se solicitó, por parte del fiscal de la causa, una orden de entrada y registro en lugar cerrado, así como de incautación de objetos y documentos respecto de 20 domicilios ubicados en las comunas de Chillan y Chillan Viejo, acogiendo dicha solicitud el Juzgado de Garantía de Chillan el día 14 de abril. Ninguno de los domicilios señalados en la respectiva solicitud fue asociado a los recurrentes de amparo.

Agrega que, de acuerdo a lo señalado en el escrito de la acción constitucional de amparo, el domicilio al que ingresaron los funcionarios del OS7 de Carabineros el día 21 de abril de 2022 corresponde a "una parcela situada en el sector rural de Quilmo Bajo en la Comuna de Chillan Viejo, sector Nebuco-Quillay, Ruta 5 Sur". En el respectivo escrito de solicitud de la medida intrusiva se indicaron los siguientes domicilios que singulariza, de la comuna de Chillan Viejo, todos referidos a otras personas distintas de las mencionadas en aquella acción constitucional.

Sostiene que los funcionarios del OS7 de Carabineros señalaron al fiscal de la causa que los domicilios ubicados en el sector rural El Quillay S//N, Chillan Viejo, eran de propiedad del líder de la red criminal y que en uno de ellos se llevaban a cabo fiestas y celebraciones de índole particular. Los otros tres domicilios de la comuna de Chillan Viejo fueron informados como pertenecientes a otros imputados de la red. De los dos domicilios ubicados en el sector rural El Quillay S/N, Chillan Viejo -ambos identificados en el respectivo informe de Carabineros con coordenadas distintas-, en uno se encontró a la conviviente del jefe de la red criminal y evidencia de interés criminal y en el otro, en cambio, no se encontró ninguna evidencia de interés criminal y se informó que en el lugar

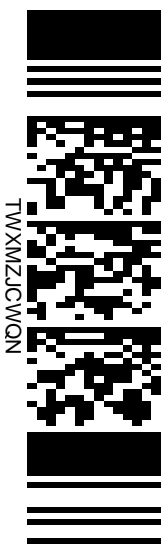


pernoctaba don José Alfredo Lagos Jara -uno de los recurrentes-, no ejecutándose en dicho lugar detención o incautación alguna.

3°.- Que, informa doña María Teresa Araya Jiménez, General de Carabineros, Jefe de Zona, quien expresa que la Sección 0.S.7. de Carabineros Ñuble, en coordinación con el Ministerio Público, conforme a la causa RUC 2100203659-K de la Fiscalía Local de Chillán, por los delitos de tráfico ilícito de drogas (artículo 3 de la ley de drogas N° 20.000), posesión, tenencia, porte de armas de armas de fuego (artículo 9 de la ley 17.798), realizó diligencias instruidas por el fiscal de la causa Juan Rohr Bocaz, quien requirió al Juzgado de Garantía de Chillán orden de detención para 11 sujetos y orden de entrada y registro para 20 inmuebles.

Detalla que la orden de entrada y registro fue autorizada por la Magistrada Sra. Claudia Verónica Madsen Venegas, mediante resolución fecha 14 de abril de 2022 del Juzgado de Garantía de Chillán, por un plazo de 10 días a contar de esa fecha. Por lo que se encontraba autorizada la entrada y registro al inmueble ubicado en el sector rural El Quillay sin número, en la comuna de Chillán Viejo. Agrega que el 21 de abril de 2022 se dio cumplimiento a la orden judicial de entrada y registro a los veinte inmuebles ubicados en la comuna de Chillán y Chillán Viejo. Levantándose las respectivas actas de intimación y acta de entrada y registro a los inmuebles, donde los moradores toman conocimiento de la orden judicial, haciendo presente que, conforme a la planificación operativa y protocolos establecidos por Carabineros de Chile, la entrada y registro la realiza personal del grupo de operaciones policiales especiales (GOPE), quienes en primera instancia irrumpen en el inmueble y una vez éste se encuentre asegurado y sin riesgo tanto para las personas que habitan como para el personal policial que realizará el registro, se procede a intimar la orden judicial al propietario y/o encargado del domicilio.

Indica que la tenida institucional que ocupa el personal del Departamento Antidrogas 0.S.7 y secciones provinciales, no poseen lugar donde colocar la individualización personal de cada funcionario, sin perjuicio de ello, ésta es de color verde, tiene logo institucional y sigla de Carabineros de Chile, como además



la sigla de OS 7. Manifiesta que en el inmueble ubicado en el sector rural no se detuvo a ninguna persona, como tampoco existieron incautaciones vinculantes a los delitos que se investigaban, indicando que la diligencia de entrada y registro se realizó por personal masculino.

Refiere que en la causa RUC 210020203659-K de la Fiscalía Local de Chillán, conforme a lo informado por el Fiscal de la causa Juan Rohr Bocaz, tiene el carácter de secreta, conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley 20.000.

Transcribe la normativa aplicable y afirma que no se ha afectado los derechos de libertad personal y seguridad individual de los amparos y por lo mismo, no existen antecedentes, argumentos ni elementos de juicio que permitan acreditar y sustentar el presente recurso de amparo, por lo que se solicita se tenga por informado y, en definitiva, declarar que se rechace el mismo, con costas.

4°.- Que, el recurso de amparo, tiene por objeto que todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, pueda ocurrir a la magistratura a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. El mismo recurso, en igual forma, puede ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

5°.- Que, conforme al mérito de los antecedentes que se han incorporado, es posible dejar asentado que personal de Carabineros de Chile, en horas de la mañana del día 21 de abril del presente año, ingresó al domicilio ubicado en el Sector Quillay de la comuna de Chillán Viejo, para lo cual descerrajaron la puerta de ingreso a la vivienda, procediendo en su interior a inmovilizar a los amparados y su hija de nueve años de edad, quienes dormían al momento del allanamiento.

6°.- Que, tal ingreso de carabineros se produjo a propósito de la investigación penal llevada a cabo por el Ministerio Público en el ruc 2100203659-



K, habiendo sido solicitada por el persecutor una orden de entrada y registro a 20 inmuebles distintos y que fuera autorizada por el Juzgado de Garantía de Chillán mediante resolución de catorce de abril del año en curso, existiendo dos de aquellos singularizados de manera idéntica, en los números 8.- y 9.-, como “Sector rural El Quillay S/N Chillán Viejo”.

7°.- Que, tal como se ha reconocido por la señora Fiscal Regional de Ñuble, ninguno de los amparados se encuentra sometido a investigación penal vigente en calidad de imputados y la Fiscalía no ha solicitado orden de entrada y registro u otra medida intrusiva respecto de ambos. Sin embargo, a pesar de tal reconocimiento, de todas formas, de una manera genérica y sin detalle alguno, se pidió por dicho ente persecutor una orden de entrada, registro e incautación al inmueble en cuestión, sin verificar que sus ocupantes actuales no tenían relación con la investigación que se llevaba a cabo, dictándose, con la misma falta de precisión, la resolución por el tribunal que fuera requerido, y por la cual finalmente actúa Carabineros.

8°.- Que, si bien, no se ha discutido la legalidad de dicha orden, lo cierto es que para su cumplimiento, se irrumpió por las fuerza policial en un domicilio donde dormían personas que ninguna relación tenían con los delitos investigados por el Ministerio Público, actuando sin consideración alguna por el especial trato que el Estado debe dispensar a la niña que allí pernoctaba y sin prever que tanto su presencia como la de su madre, exigían contar con personal femenino que resguardara su dignidad e integridad en el procedimiento que ejecutaban.

9°.- Que, así las cosas, Carabineros, a pesar de constatar que los ocupantes del domicilio no tenían relación con la investigación, siguió adelante con el registro, provocando los efectos nocivos que se denuncian en el arbitrio, pudiendo haber detenido o adecuado su actuar a las circunstancias del caso, lo que no hizo. De este modo, dicho exceso deviene en arbitrario, pues no es razonable someter a ciudadanos que nada tienen que ver con la investigación, a las limitaciones a la libertad personal y seguridad individual que se han constatado a raíz del allanamiento violento realizado, sin que se haya dado una explicación



satisfactoria y coherente por parte de las instituciones involucradas, todo lo cual lleva a estimar que la acción de amparo deba ser acogida para restablecer el imperio del derecho, en la forma que se dirá.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo previsto por el artículo 21 de la Constitución Política de la República, **SE ACOGE** el recurso de amparo deducido por el abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, don Gustavo Peñailillo Lechuga a favor de doña Mireya de las Mercedes Pérez Sáez, don José Alfredo Lagos Jara y de su hija de 9 años de edad de iniciales J. A. C. P. en el sentido de declarar que el allanamiento efectuado por Carabineros en Sector rural El Quillay S/N Chillán Viejo afectó seriamente la libertad personal y seguridad individual de los amparados y en consecuencia, dada la gravedad de los hechos denunciados, se ordena que Carabineros de Chile dé inicio a la investigación correspondiente para dilucidar posibles responsabilidades administrativas y, asimismo, el Ministerio Público deberá investigar la eventual comisión de hechos de carácter ilícito en la diligencia policial de autos, de estimarlo procedente.

Asimismo, se dispone la prohibición de acercamiento de funcionarios de Carabineros de Chile al domicilio de los amparados, en tanto no cuenten con una instrucción fiscal para realizar diligencias de investigación precisas, o con autorización judicial en los casos en que ello procede.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y, ejecutoriado, archívese

Redacción a cargo del Ministro titular señor Guillermo Arcos Salinas.

Rol N° 74-2022 Amparo.

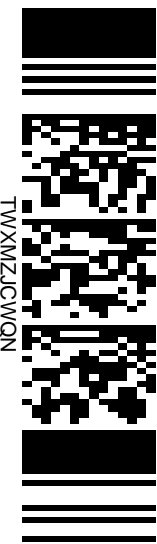




TWXMZJCWON

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Chillan integrada por Ministro Presidente Claudio Patricio Arias C. y los Ministros (as) Guillermo Alamiro Arcos S., Erica Livia Pezoa G. Chillan, doce de mayo de dos mil veintidós.

En Chillan, a doce de mayo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>